

**D. L.:** Es posible que sí, pero es una rama que va paralela a la literatura.

**J. E.:** Se toma el testimonio únicamente como vinculado a los procesos revolucionarios, *izquierdosos* de Centroamérica, pero hay otros testimonios. Me acuerdo que en Nicaragua salió uno sobre un chero, que le había dado no sé qué enfermedad y que estaba paralítico, eso también es un testimonio. Claro, nadie habla de ese testimonio. Si a vos te da cáncer y te vas a morir, y entonces escribís tus últimos días de vida y se publica, eso es un testimonio, pero nadie va a hablar de ese testimonio.

**A. R.:** Claro, hay una moda.

**J. E.:** Eso es lo que a mí me fastidia un poco, que sólo toman en cuenta esos testimonios.

**A. R.:** Claro, porque una cosa es el debate generado desde las universidades, y otra cosa es lo que está pasando en esta realidad tan cambiante centroamericana.

*Valeria Grinberg Pla es asistente en el Área de Literatura Latinoamericana y Española del Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Francfort.*

*Werner Mackenbach es profesor invitado de literatura hispanoamericana e investigador en el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en San José.*

**Gerhard Drekonja-Kornat**

## **Colombia: Who will blink first?**

Un presidente que aparenta exteriormente la timidez de un estudiante de bachillerato. Una mujer, Marta Lucía

Ramírez, ministra de Defensa por primera vez en la historia de Colombia. Otras seis mujeres en puestos ministeriales, entre ellas Carolina Barco, responsable de la política exterior, cuya madre es ciudadana estadounidense. ¿Es éste el “giro hacia la derecha radical” que, según la interpretación de muchos observadores europeos, atraviesa Colombia luego de la sorprendente victoria electoral del *outsider* Álvaro Uribe Vélez en mayo de 2002? El 53% de los votantes votó por Uribe, formalmente comprometido con el Partido Liberal, porque prometió la pacificación del país. Para explicar este ominoso concepto de “pacificación”, el 7 de agosto, fecha de la toma de posesión de la Presidencia de la República por parte de Uribe, el grupo guerrillero FARC disparó con morteros de preparación casera sobre el barrio gubernamental de Bogotá. Una granada explotó en el Palacio Presidencial conservado en un estilo pseudo-clásico. De inmediato hubo una respuesta oficial a través de la proclamación del estado de “conmoción interior”, una forma más leve del antiguo estado de emergencia, introducido en la Constitución de 1991. Por consiguiente la cuestión no es cuán a la derecha se encuentra el gobierno de Uribe, sino qué es lo que se debe hacer para prevenir la desintegración total del Estado colombiano. No queda mucho tiempo más. Si bien en Bogotá transcurre la vida cotidiana aparentemente de forma impasible y normal, en los informativos de la televisión de las 19 horas dominan todos los días informes sobre batallas y escaramuzas en todo el país, sobre actos de violencia política, secuestros, explosiones, atentados. En la periferia sureste de Bogotá ha pasado el control del ejército a la guerrilla. En el barrio periférico de Nazareth, situado a 3.000 metros de altura, frío y envuelto en niebla, donde Bogotá desemboca en el altiplano Sumapaz, es de público conoci-

miento que los familiares de víctimas de secuestros pueden negociar el monto del rescate. Se recomienda seriamente no viajar en omnibuses interurbanos ya que la denominada “pesca milagrosa” (forma irónica con la que los colombianos denominan los secuestros practicados por diversos grupos guerrilleros, paramilitares o de simples bandidos) tiende sus redes cada día mediante barreras improvisadas en las carreteras. Las grandes ciudades se han convertido en cárceles, de las cuales sólo se puede huir en avión. Hoy en día, en septiembre de 2002, por término medio once colombianos sufren diariamente el destino de los secuestros y terminan en una especie de “prisión de guerra” en su propio país.

Colombia no es asolada por una guerra civil convencional con frentes claros, sino por un sistema de “micro-guerras”, en el cual arden muchos fuegos, desconcertando sobre todo a la población civil. En las ciudades se apiñan unos dos millones de “desplazados”, eufemismo utilizado para denominar a los fugitivos de las cruentas luchas. Por lo menos un millón de ciudadanos ha emigrado en los últimos tres años, hacia Miami o hacia donde sea posible, dependiendo de la visa que se pueda conseguir.

¿Qué sucede realmente en Colombia, en este enorme y hermoso país, rico en minerales, con tierras de cultivo fértiles, y cuyas exportaciones de carbón y petróleo podrían alimentar cómodamente a sus 40 millones de habitantes? Colombia estuvo gobernada durante 150 años por una aristocracia elegante y consciente de su propia valía, a la que se le quiso confiar una modernización evolutiva del país. El país atravesó de hecho fases intermedias productivas y dinámicas. A diferencia de otros países sudamericanos, Colombia no tuvo el problema de la deuda externa. Si bien vibraba desde los años cincuenta un

nivel de violencia relativamente elevado, esto apenas afectaba el crecimiento económico, superior al promedio. En 1991, cuando la nueva Constitución colombiana —el documento más hermoso de este tipo en América Latina— alcanzaba un amplio consenso, el país se disponía a realizar un salto cualitativo. La violencia guerrillera parecía haberse extinguido. Hoy, once años más tarde, diferentes organizaciones guerrilleras controlan el interior y se acercan a las grandes ciudades. ¿Qué salió mal? La élite colombiana abandonó durante las últimas dos presidencias sus virtudes, actuó irresponsablemente y dejó que proliferase la corrupción. El laborioso empresariado colombiano encalló parcialmente en el tráfico ilegal de drogas, que terminó penetrando también a los bancos. Ello acarreó mucho dinero negro al país, pero también causó una dura reacción de Estados Unidos, que quiso ejemplificar en Colombia la “guerra contra la droga”.

Tras el fracaso entre 1984 y 1992 de diversas negociaciones de amnistía y de paz, los enfrentamientos escalaron. Grupos guerrilleros tradicionales reclutaron nuevos miembros, aumentando considerablemente su fuerza militar. Aquí se destacaron especialmente los antiguos partisanos campesinos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ideológicamente más moderno ELN (Ejército de Liberación Nacional). Poco tiempo después, Estados Unidos colocó en una misma bolsa a la droga y a la guerrilla, y definió como nuevo enemigo a la “narco-guerrilla”. Entonces comenzó, en el marco del Plan Colombia, con un monto de 1.200 millones de dólares, el rearmado del ejército colombiano, haciendo rociar además desde el aire amplias superficies del país con defoliantes. Así, la guerrilla pudo presentarse como la fuerza protectora de los campesinos de coca y amapola, enfrentarse al “imperialismo” y

mostrarse como alternativa política. Ello originó en el correr de los noventa una rama económica dinámica, ya que la guerrilla recaudó impuestos de campesinos y comerciantes, extorsionó en todo el país dinero de protección, diversificó en otras formas la economía paralela, terminando por fin sistemáticamente en el lucrativo negocio de los secuestros. De esta manera, los grupos guerrilleros alcanzan anualmente un volumen de cientos de millones de dólares. Los contenidos políticos se pierden en el camino.

Estos guerreros no tienen ya nada más en común con un Che Guevara, todavía icono de la clásica guerrilla latinoamericana. Sus comandantes actúan más bien como *warlords* sin ideología, de manera no menos brutal que el ejército, el cual hasta ahora no ha luchado realmente. Por eso las autodefensas paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC) funcionan como defensoras del *establishment*. Los miembros de las AUC, además de enfrentarse en las refriegas militares con la guerrilla, proceden de forma especialmente dura contra supuestos simpatizantes de los partisanos, asesinando preferentemente a defensores de derechos humanos, profesores universitarios e intelectuales. Pese a esto, el presidente anterior de Colombia, Andrés Pastrana (1988-2002), quien codiciaba el Premio Nobel de la Paz, intentó una arriesgada estrategia de paz a través de la cesión de los derechos de soberanía de una amplia zona autónoma de 41.000 km<sup>2</sup> (equivalente a la superficie de toda Suiza o a la mitad de Austria) a los guerrilleros de las FARC del envejecido líder campesino Manual Marulanda (vulgo *Tiro fijo*), lo que no alegró en absoluto a la población de la zona. Las FARC ganaron así reconocimiento internacional, enviaron “embajadores” a México y Europa, aumentaron su fortuna y pusieron en ridículo al Estado. No tuvo lugar pacifi-

cación alguna. El 20 de febrero de 2002 el jefe de Estado colombiano tuvo que interrumpir el temerario experimento.

Entretanto, llegó el 11 de septiembre a Nueva York. Estados Unidos, profundamente traumatizado, proclamó una nueva campaña, esta vez contra el “terrorismo internacional”. Los tres grupos colombianos, AUC, FARC y ELN, aparecen en su lista de organizaciones terroristas. La propia lista de la Unión Europea incluyó primero solamente a las AUC, pero tras las luchas extraordinariamente brutales entre AUC y FARC en el departamento de Chocó (donde fueron masacrados 120 civiles que se habían atrincherado en la iglesia de la localidad de Bojayá), las FARC fueron ingresadas en la lista europea. (Resulta interesante que Bruselas haya dejado por ahora fuera al ELN.) Y otra vez más, el primer test en la guerra contra el “terrorismo internacional”, según la perspectiva de Washington, se realizará en Colombia. Esto explica el ascenso fenomenal del actual presidente Álvaro Uribe, quien, con ayuda de Estados Unidos, quiere ganar la guerra en su propio país. Uribe por sí solo no es un esbirro de Estados Unidos. Este estricto católico, que vive de forma espartana, trabajador incansable, destacado como exitoso gobernador del departamento clave de Antioquia, proviene del *establishment* aristocrático pero conoce muy bien los vicios del mismo. Estos vicios son las pocas ganas de pagar impuestos (la debilidad tradicional del Estado colombiano está fuertemente relacionada con esto) y la negativa de mandar a sus propios hijos a la guerra. El presidente Uribe conoce además de una forma más precisa que otros la situación catastrófica del país, cuya nivel de violencia cada vez más elevado ha estrangulado la economía. La descomposición de Colombia es descrita sin miramientos en un notable diagnóstico presentado en marzo de 2003 por Álvaro

Uribe en su programa de gobierno (“Mano Firme, Corazón Grande”). De manera ilustrativa mencionamos solamente una cifra: El ingreso per cápita de Colombia se redujo de US\$ 2.257 en 1996 a US\$ 1.890 en 2002. Además, como consecuencia de los disturbios de la guerra civil, 23 de los 40 millones de habitantes de Colombia, viven en situación de pobreza y 7,4 millones vegetan en la miseria.

¿Qué hacer? La respuesta de Uribe: ¡Crear seguridad! ¡Revitalizar al Estado! ¡Quitarle el poder a la casta política corrupta! (Por ejemplo mediante la reducción del Parlamento a una Cámara.) ¡Forzar un programa social! para llegar a un “estado comunitario”. (Sí, ¡el presidente utiliza el vocabulario comunitario!) Desde la asunción del gobierno el 7 de agosto, el jefe de Estado, cuya torpe apariencia encierra un núcleo de acero, emite diariamente muchos decretos, proyectos de ley y medidas administrativas sobre la sociedad colombiana. Se trata primordialmente de conseguir más dinero, es decir imponer impuestos más elevados. Sin embargo, su primera medida, una tributación específica al patrimonio, sólo afecta a los grupos con ingresos más altos. El nuevo presidente quiere además un ejército que por fin luche. Para lograr este objetivo se planea incrementar las fuerzas de seguridad en 55.000 soldados profesionales y 100.000 policías. Un millón de ciudadanos se prevén como policías auxiliares y como soplones para denunciar asuntos sospechosos. Esta propuesta del ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos ha causado gran rechazo en varias partes de Colombia. Por ahora no se debe negociar con la guerrilla –con los “bandidos” según el nuevo uso idiomático–. Sin embargo, el presidente Uribe recurrió a las Naciones Unidas para que éstas presten sus buenos oficios para lograr, eventualmente por esta vía, un canje de prisione-

ros: varios miles de civiles secuestrados, entre ellos la valiente senadora Ingrid Betancourt y Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, a cambio de (eventualmente) varios cientos de guerrilleros encarcelados. También se está trabajando en un marco financiero para atraer, a cambio de dinero, a integrantes de la guerrilla (muchos de los cuales provienen del proletariado lumpen campesino). El gobierno quiere pagar de tres a cuatro mil dólares por cabeza a los desertores (la condición necesaria para ello es que rija la autorización de una ayuda financiera especial de parte de la Comunidad Europea).

Brevemente: en Bogotá sopla un viento nuevo y áspero. Todavía no se ha resuelto si de él surgirá una tormenta militar. La dirigencia del ELN y el comandante de las AUC Carlos Castaño son los primeros en comprender los signos de la época después del 11 de septiembre: ambos intentan evidentemente salir de la lista del terror. Carlos Castaño lo intenta mediante la reestructuración de las Autodefensas y de sacarlas del negocio de la droga. El ELN lo intenta a través de la discreta negociación de una posible amnistía a través de intermediación cubana. (La mediación de Alemania a favor del ELN comenzada de forma optimista en 1998 en el monasterio Puertas del Cielo –Himmelspforten– en Maguncia terminó en un callejón sin salida. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, donde Georg Boomgarden coordina la Sección América Latina, se distancia actualmente de todo.) Solamente las FARC, brutales y provincianas, permanecen obstinadas. (El columnista Antonio Caballero, uno de los más reconocidos en Colombia, las clasificó como el “Khmer Rojo colombiano”). Esto hace que parezca realista la suposición de que el presidente Uribe va a movilizar su ejército equipado profesionalmente en varios duros golpes militares contra los partisanos campesinos

de las FARC, con sus aproximadamente 20.000 combatientes dispersos por todo el país. Las FARC podrían por cierto devolver el golpe malignamente, debido a su situación apurada, realizando atentados a la infraestructura: hacer explotar puentes, represas, incendiar oleoductos petroleros (esto ha sido hasta el momento especialidad del ELN), destruir edificios altos, etcétera. Ya existe un sabotaje de las FARC contra los alcaldes, que en determinadas regiones se encuentran frente a la opción de renunciar o ser fusilados. De esta manera surgirían “territorios des-estanzados”, en los cuales mandan solamente los partisanos campesinos. Unos cien alcaldes ya se han decidido por la renuncia, otros ejercen sus funciones fuera de sus comunas, en lugares seguros, como por ejemplo en cuarteles del ejército.

Este triste juego podría desembocar en lo siguiente: *Who will blink first?* ¿Quién es el debilitado que cede primero, llamando en uno o dos años nuevamente a la mesa de negociaciones? Este sería el pensamiento convencional. El desarrollo de Colombia casi nunca sigue esquemas sencillos. Lo que impresiona enormemente de este país sudamericano tan notable, es el compromiso de la sociedad civil: madres, padres, escolares, activistas de la paz (a menudo en bicicleta o patines), alcaldes, indígenas, intelectuales, artistas, sacerdotes, sindicalistas o simplemente campesinos: todos están cansados de las carnicerías y reclaman paz. Como el gobierno no puede garantizar la paz, lo intentan por su propia iniciativa. Debajo de la esfera gubernamental, en el ámbito de provincias o municipalidades, de comunidades indígenas, de grupos de la Iglesia o de consejos de paz creados espontáneamente funcionan diversos contactos, conversaciones y negociaciones que buscan reducir el nivel de violencia. Intentan desplazar las luchas entre la guerrilla, autode-

fensas y/o el ejército hacia zonas despojadas, lejos de los pueblos, sacar de la guerrilla a los niños soldados, desactivar minas terrestres, evitar secuestros, liberar rehenes y básicamente humanizar las muchas micro-guerras existentes. En este sentido la Cruz Roja paga un *spot* televisivo con este simple mensaje: “¡Juego Limpio! ¡Respetar las reglas internacionales de la guerra!” Nada caracteriza mejor la tragedia de Colombia que este mensaje publicitario: la población estaría contenta si los enfrentamientos militares transcurriesen estrictamente según la Convención de Ginebra. Lo que actualmente no sucede en absoluto. Y Estados Unidos arroja aceite en el fuego sucio, reclamando a Colombia que ninguno de los soldados estadounidenses, que rotan por centenas como asesores en el país, pueda ser citado por la Corte Penal Internacional por eventuales violaciones a los derechos humanos.

*Gerhard Drekonja-Kornat es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Viena, Austria.*

**Francisco Sánchez López**

## **Antecedentes recientes de la situación política ecuatoriana**

En enero de 2003, si no pasa nada extraordinario, asumirá el poder el nuevo presidente del Ecuador; su reto será comandar un sistema político desestructurado —¿o en proceso de reestructuración?— y ofrecer salidas a la complicada situación económica y social del país. En lo económico, el tema de fondo es generar creci-